

C.A. de Santiago

Santiago, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés.

**Visto:**

En estos antecedentes RUC 2300339393-3, RIT O-159-2023, se dictó sentencia por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, el once de septiembre del año en curso, por la que se condenó a MANUEL JESUS GARRIDO INDA, a la pena de siete años y ciento ochenta y cuatro días de presidio mayor en su grado mínimo; accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, así como el comiso de las especies incautadas bajo los NUE 5579698 y 5579699; como autor de un delito de robo en lugar habitado, en grado consumado, ilícito previsto y sancionado en el artículo 440 Nro. 1 del Código Penal, perpetrados en la comuna de Vitacura, el día 28 de marzo de 2023.

No se le impusieron costas y por no reunirse los requisitos legales para ello, tampoco se le aplicó al sentenciado ninguna de las penas sustitutivas previstas en la Ley Nro. 18.216, por lo que deberá cumplir real y efectivamente la sanción impuesta, sirviéndole de abono los días que ha estado sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva en forma ininterrumpida, esto es, desde el 28 de marzo de 2023 a la fecha de dictación de dicha sentencia, ciento sesenta y ocho días (168) según consta en certificado emitido por el ministro de fe del Tribunal.

En contra de esa decisión la abogada defensora penal pública, Marcela Araya Acuña, deduce recurso de nulidad fundado en la letra e) del artículo 374, en relación con los artículos 342 letra c) y 297, todos del Código Procesal Penal, por estimar que se ha infringido el principio de la corroboración. En forma subsidiaria, invoca la causal de invalidación prevista en la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, por estimar infringido el artículo 456 del Código Punitivo.

En la audiencia de siete de noviembre pasado efectuada para conocer del recurso, a la cual comparecieron tanto la Defensoría como el Ministerio Público, la parte recurrente reiteró los planteamientos consignados en su arbitrio; y en dicha oportunidad se fijó como fecha para la lectura del fallo, el día de hoy.

**Considerando:**



**Primero:** Que, en su presentación, la recurrente expone que el recurso de nulidad se funda en la causal de la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 342 letra c), pues el análisis efectuado sobre la prueba rendida en el juicio oral, para dar por establecida la calificación jurídica de los hechos, no cumple con los requisitos del artículo 297 del Código Procesal Penal, ni con el estándar de convicción del artículo 340 del mismo cuerpo legal.

Refiriéndose al principio de corroboración, la defensa hace presente que la participación de su representado en el delito de robo en lugar habitado, ocurrido el 28 de marzo de 2023, no fue demostrada en el juicio, en atención a que de las premisas acreditadas durante el mismo, no es posible arribar solo a dicha conclusión, al no haber antecedentes suficientes que la demuestren, careciendo entonces la conclusión a la que arribó el Tribunal de la suficiente fundamentación al dar por acreditada la participación del acusado.

Indica que la defensa planteó en su alegato de apertura la falta de participación de Manuel Jesús Garrido Inda en los hechos por el cual fue acusado, y que habiendo renunciado a su derecho a guardar silencio aquel declaró en los términos que indica. No obstante, el tribunal en el considerando duodécimo realiza la valoración de los medios de prueba y descarta la tesis de la defensa, infringiendo el principio de la corroboración, en lo que dice relación con las vestimentas que tenía el sujeto que ingresó al domicilio de la víctima; en lo relativo a la huida del sujeto que ingresó al domicilio de las víctimas; y en cuanto al lugar donde los guardias municipales se encuentran por primera vez con el imputado. Así, expone, en relación con el primer punto, los tres testigos que declaran en juicio dan descripciones distintas de las ropas que usaba el sujeto que ingresó a tal domicilio. Luego, en cuanto a la huida del sujeto, el tribunal concluye que el acusado entró al domicilio de las víctimas y huyó por Pasaje la Rinconada tomando dirección hacia calle La Rinconada, fundando esta conclusión en los testimonios contradictorios del funcionario Municipal Sr. Gallo y las víctimas Sra. De Castro y Sr. Olivares. A su vez, agrega, en lo que respecta a cuándo es visto el encausado por los guardias municipales por primera vez, existen dos versiones la de su parte –que señala que es detenido en Padre Hurtado con Vitacura– y la de los funcionario Municipales, Sr. Sara, que dijo que vio al acusado por primera vez en el Pasaje La Rinconada hacia calle la



Rinconada, huyó y fue detenido en calle Padre Hurtado con calle las Hualtatas.

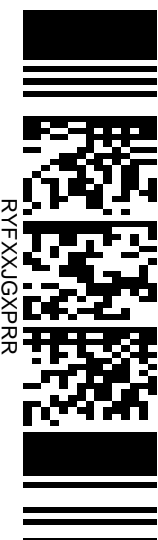
Afirma que los jueces no se hicieron cargo de las inconsistencias en las declaraciones de los testigos que se refieren a cada una de las circunstancias antes señaladas y, tratándose del último punto aludido, omiten argumentar la razón por la cual entienden que hubo un error en la reconstrucción efectuada por aquellos.

En suma, asevera que la defensa estima que no hay corroboración de las premisas fácticas sobre las que se sostiene el juicio emitido por el tribunal, toda vez que la prueba de cargo es inconsistente, contradictoria sobre puntos relevantes, los que no han sido explicados de manera coherente, afectando la coherencia de las evidencias destinadas a acreditar la participación del acusado en los hechos investigados.

Hace presente, a continuación, que en este caso el perjuicio es evidente y está dado en la especie porque de haberse respetado los límites y exigencias de los artículos 297 y 340 del Código Procesal Penal, y con ello haberse observado en forma estricta lo dispuesto en el artículo 342 letra c) del mismo Código, su representado habría sido absuelto por el delito de robo en lugar habitado por falta de participación. Continúa aseverando que la valoración de la prueba, contraria a los principios de la lógica y las máximas de la experiencia como, asimismo, la falta de fundamentación en que ha incurrido la sentencia definitiva del tribunal *a quo*, han influido sustantivamente en lo dispositivo de esa resolución y sólo son salvables con el recurso de nulidad aquí intentado.

Concluye pidiendo que se acoja el recurso y se declare nula la sentencia y el juicio oral, determinándose el estado en que debe quedar el procedimiento y remitiéndose los antecedentes al Tribunal no inhabilitado que correspondiere, para que este disponga la realización de un nuevo juicio oral.

**Segundo:** Que, primeramente y en relación con la causal principal de anulación, debe consignarse que el artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal impone al contenido de la sentencia la necesidad de una exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieran por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamenten dichas conclusiones. Ponderación que se lleva a cabo con libertad, empero, sin



contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297 del mismo Código. A propósito de la lógica, se ha señalado que pretende distinguir entre los razonamientos correctos de los que no lo son, entre cuyas proposiciones debe existir una vinculación racional, a las que se les denomina implicación, equivalencia, consistencia e independencia; se sostiene también que la lógica formal genera ciertas leyes o principios, entre los que se ubican el de la identidad, no contradicción, tercero excluido y de la razón suficiente. Conforme a esta última, las cosas existen y son conocidas por una causa capaz de justificar su existencia; todo lo que sucede tiene una razón suficiente para ser así y no de otra manera. Asimismo, se sostiene que existen cuatro principios comunes a todos los criterios de verdad, a saber, principio de la corroboración, de la coherencia, de la aplicación práctica y universalidad de la evidencia. En el caso *sub judice* se cuestiona el principio de la corroboración, conforme al cual una afirmación debe someterse a corroboración, es decir, debe mostrar su fortaleza. Esa fortaleza de la verdad corroborada es la que debe traspasarse al justiciable y a la ciudadanía.

Si bien, según se ha encargado de precisar el profesor Jordi Ferrer, no es fácil precisar en qué consiste estrictamente esa corroboración pues no existe una definición legal y uniforme del término, el Tribunal Constitucional español ha delimitado la necesidad de corroboración a dos ideas: la primera, que exige que la corroboración sea mínima –no necesariamente plena– y únicamente concerniente a algunos elementos de la declaración, no a todos. En segundo lugar, considera que la corroboración conlleva, al menos, la concurrencia de algún hecho, dato o circunstancia externa e independiente a la declaración. De esta forma, la corroboración supone que han de existir otros elementos probatorios que se dirijan en la misma dirección, sin necesidad de que se trate de pruebas que, por sí mismas, y al margen de esta, puedan demostrar explicar la condena. (“Manual de razonamiento probatorio”, Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, [2022] primera edición, pp. 338 y 339).

**Tercero:** Que, vinculado con la propuesta de la defensa, se ha sostenido en múltiples oportunidades que los tribunales y la doctrina han hecho hincapié en la obligación de motivar o fundamentar las sentencias,



por cuanto tal exigencia no sólo dice relación con un asunto exclusivamente procesal, referido a la posibilidad de recurrir, que implica impugnar una resolución de manera de evitar errores y arbitrariedades –derecho consagrado en la Carta Fundamental, que importa la idea del racional, justo y debido proceso que debe alcanzarse en la sentencia– sino porque, además, se relaciona con un tema externo a la procesabilidad indicada, que se enmarca en la necesidad de someter al examen que puede hacer cualquier ciudadano de lo manifestado por el juez y que hace posible, asimismo, el convencimiento de las partes en el pleito, evitando la impresión de arbitrariedad al tomar éstas conocimiento del porqué de una determinación.

No puede dejar de mencionarse que ya Andrés Bello se encargó de precisar que “[...] si la sentencia no es otra cosa que la decisión de una contienda sostenida con razones por una y otra parte, esa decisión debe ser también racional, y no puede serlo sin tener fundamentos en qué apoyarse; si los tiene, ellos deben aparecer, así como aparecen los que las partes han aducido en el juicio, que, siendo público, nada debe tener de reservado y con toda diligencia ha de procurar alejarse de cuanto parezca misterioso. [...] Admitir sentencias no fundadas equivale en nuestro concepto a privar a los litigantes de la más preciosa garantía que pueden tener para sujetarse a las decisiones judiciales”. (“Administración de justicia”, en *El Araucano*, Nro. 296, 6 de mayo de 1836, ahora en *Id.*, Obras completas, Tomo IX, Santiago, 1885, p. 152).

**Cuarto:** Que, luego, la fundamentación de las resoluciones judiciales aparece como una exigencia obligatoria para los jueces, tendiente a conseguir una aplicación razonada del derecho que dé cuenta de las razones que conducen a adoptar una determinada decisión, y no otra, en la controversia que trae aparejado todo proceso. De suerte que la fundamentación se erige como una obligación dentro del ejercicio de la potestad jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, cuyo quebrantamiento se corrige a través de la declaración de nulidad de la resolución. Se trata, además, de una exigencia que alcanza la categoría de derecho esencial, entendiéndola incluida en el derecho a la tutela judicial efectiva, desde que esta última sólo se concretiza cuando, frente a la arbitrariedad, se impone una respuesta sustantiva que aparezca razonada. Así, se ha considerado que el derecho a la tutela judicial efectiva, además del acceso a la jurisdicción y la ejecutividad del fallo, comprende el derecho a



obtener una sentencia debidamente argumentada, lo cual importa, a su vez, la necesaria justificación aplicada de la decisión a los presupuestos fácticos del pleito, vale decir, la motivación o fundamentación.

Finalmente, debe adicionarse, que si bien la obligación de motivar la sentencia no impone un razonamiento judicial exhaustivo y detallado que abarque todas los tópicos, con sus diferentes matices, que las partes presentan sobre la cuestión discutida, la decisión debe congrega los caracteres sustanciales de la motivación judicial, a saber, que sea completa, clara, explícita y legítima, debiendo hacerse cargo tanto de los hechos como del derecho. Igualmente, debe escrutar los elementos incorporados, proporcionando las conclusiones a que se arribe luego de su análisis.

**Quinto:** Que, por otra parte, en sede penal entran en juego, de un lado, la facultad punitiva estatal y, del otro, el conjunto de derechos que, tanto a nivel constitucional como legal, se reconoce a las personas en tanto sujetos del derecho y que, por sobre todo, deben respetarse, no sólo por su calidad de tales, sino porque la experiencia ancestral demuestra que su transgresión conduce a un estado de caos y destrucción que el ser humano ha abandonado desde hace siglos. En este contexto, el repudio hacia las inconductas que se yergue como rector en la sociedad, debe necesariamente reflejarse en la sanción a imponer a quienes vulneran las reglas que rigen la convivencia civilizada; sin embargo, el ejercicio sancionatorio también como reflejo de dicho repudio, necesariamente, debe erigirse sin reproche alguno luego del destilado al que lo someten no sólo los involucrados en un procedimiento de la índole del que se trata sino, también, cualquier ciudadano y que se encuentra en el área de la legalidad y obediencia a las normas que nos hemos impuesto como conglomerados avanzados o, a lo menos, instruidos. En otros términos, la fortaleza de la verdad corroborada.

**Sexto:** Que, en ese contexto, el reproche de ilegalidad que se examina se ha enmarcado en la ausencia de la exposición clara y lógica de los hechos que se han tenido por probados, suponiendo que en el fallo se ha vulnerado el principio de la corroboración –según se adelantó– en lo que dice relación a las vestimentas que tenía el sujeto que ingresó al domicilio de la víctima; en lo relativo a la huida de aquel; y en cuanto al lugar donde los guardias municipales se encuentran por primera vez con el acusado. Al efecto, la impugnante aduce, primero, que existen tres descripciones distintas en relación con las vestimentas del sujeto que ingresó al domicilio de las



víctimas, a saber, la de la víctima Sr. Olivares, quien señala que el sujeto que ingresó a su domicilio vestía ropa oscura; la de la Sra. De Castro, otra víctima, quien asevera que usaba ropas oscuras con capucha; y la del guardia municipal, Sr. Gallo, quien refiere que vestía jeans oscuros, polerón negro con letras blancas y zapatillas negras con plataforma blanca. Agrega que de la prueba presentada por el Ministerio Público también se cuenta con las fotografías de las vestimentas que usaba el acusado al momento de su detención, que consistía en pantalón de buzo oscuro, polerón sin capucha con letras blancas y zapatillas negras.

Seguidamente, en relación a la huida del sujeto que ingresó al domicilio de las víctimas, dice la recurrente que el tribunal concluyó que el imputado ingresó y huyó por Pasaje la Rinconada tomando dirección hacia calle La Rinconada, fundando esta conclusión en los testimonios contradictorios del funcionario Municipal Sr. Gallo, la víctima Sra. De Castro y el de la víctima Sr. Olivares. Explica que la víctima Olivares Padilla dijo que el funcionario municipal que entró a la casa no pudo subir al techo, sin embargo, su esposa señaló que su hijo y el funcionario municipal sí subieron al techo y esto se ratifica con los dichos del mismo testigo Gallo, quien sostuvo que se subió al techo de la casa que colinda con el domicilio de la víctima y es por esto que pudo ver cuando el sujeto huyó por Pasaje Rinconada en dirección a calle La Rinconada.

Luego, en cuanto a cuándo fue visto el acusado por los guardias municipales por primera vez, indica la recurrente que existen dos versiones, la del imputado que señala que fue detenido en Padre Hurtado con Vitacura, y la de los funcionario Municipales, Sr. Sara, que refiere que vio a un sujeto por Pasaje La Rinconada hacia calle la Rinconada; que se encontró de frente con él y con otro funcionario Municipal, Sr. Poblete, quien no declaró en juicio y, estando él con su colega Poblete en el pasaje La Rinconada con calle La Rinconada –pasaje descrito por el testigo como angosto, donde no caben más que dos vehículos– su representado se dio a la fuga y lo logran detener a tres cuadras del lugar donde lo vieron por primera vez, estando ellos de frente y uno de ellos movilizándose en moto, se demoraron tres cuadras en detenerlo, no obstante, uno de ellos lo siguió en moto. Hace presente que en juicio solo declaró Guillermo Sara Almuna; no prestaron declaración el Sr. Poblete ni el funcionario de Carabineros que tomó el procedimiento. Añade que en la versión dada por el acusado en juicio señaló que él se dirigía

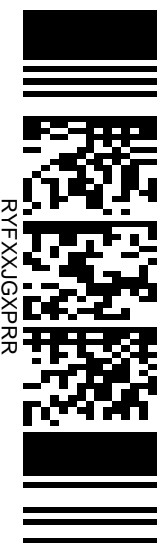


desde la Avenida Las Condes hacia el norte por Padre Hurtado para llegar hasta Vitacura, donde fue detenido por los guardias Municipales; que después de una hora llegó Carabineros cuando ya había sido detenido por los guardias municipales. Así, dice que existen dos versiones de los hechos: la dada por el encausado y la de los guardias municipales, sin que exista ninguna otra prueba que corrobore lo afirmado por los guardias municipales.

La defensa estima que no hay corroboración de las premisas fácticas sobre las que se sostiene el juicio emitido por el tribunal, ya que la prueba de cargo es inconsistente, contradictoria sobre puntos relevantes, que no han sido explicados de manera coherente, afectando la coherencia de las evidencias destinadas a acreditar la participación del acusado.

**Séptimo:** Que, en cuanto a las críticas formuladas en el arbitrio en examen, antes detalladas, es dable asentar que, particularmente de la lectura de los motivos noveno, undécimo y duodécimo del fallo censurado aparece con nitidez que el tribunal se hizo cargo de forma explícita sobre las contradicciones que advierte la defensa en su libelo, en relación con las declaraciones prestadas en juicio concluyendo que descarta la tesis principal de la defensa, a saber, la falta de participación de su representado.

Así, reflexionan en el motivo noveno, luego de examinar la prueba testimonial, que “[t]odo esto da cuenta de una concatenación de momentos que se siguen de tal forma que el sujeto observado por Gallo, que luego fue perseguido y detenido por Poblete y Sara, nunca dejó de estar bajo vigilancia y seguimiento por los funcionarios municipales. Esto, sumado a la inmediatez que existe entre la visualización del individuo que escapa por los techos, el avistamiento (sic) por Pasaje Rinconada y la detención de MANUEL JESUS GARRIDO INDA, hacen que no quepa duda razonable en estos sentenciadores de que era él el sujeto avistado por las víctimas en su patio y autor de los hechos materia de la acusación”. Para continuar aseverando, en la reflexión undécima, que “[e]sto se ve fortalecido con la declaración del funcionario Gallo, quien da cuenta de sus dichos al describir las vestimentas, explicando el motivo por el cual está tan seguro de su descripción, y quien indica que bajó del techo solo una vez que el funcionario Poblete informó por radio que tenía a la vista a un individuo con las mismas ropas que salía desde Pasaje Rinconada, último lugar al que Gallo vio entrar al individuo que perseguía. Por otro lado, la tesis alternativa que levanta el acusado con su

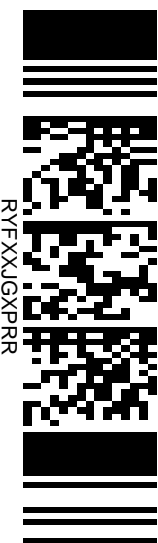




declaración, a saber que se dirigía a buscar trabajo a una construcción en Vitacura, no tiene ningún sustento objetivo: el acusado no recuerda la dirección de dicha construcción, nadie en ningún momento vio la supuesta carpeta con documentos laborales que dijo llevar y haber perdido en el forcejeo, nadie recuerda que el acusado lo haya pensionado al ser detenido. En definitiva, esta posibilidad se descarta ya que no existe ningún sustento para la misma más allá de los dichos del propio acusado, y por tanto, no es posible su confirmación”.

Concluyendo finalmente que “[...] las diferencias entre estas son de menor entidad y no afectan en lo sustancial su contenido. La víctima De Castro creyó que el polerón tenía una capucha y esto no era así, un detalle menor en lo que en definitiva describió como ropas negras, lo que se puede atribuir a una sombra que caía sobre la cabeza del sujeto que estaba de espalda o a la poca visibilidad de la madrugada o al notable nerviosismo que la testigo exhibió en su declaración. La víctima Olivares Padilla, dijo que el funcionario municipal que entró a la casa no pudo subir al techo, sin embargo, su esposa dice que su hijo y el funcionario subieron y esto se ratifica con los dichos del mismo testigo Gallo. Ninguno de estos testigos parece tener una ganancia secundaria y los dichos de Olivares Padilla, si bien claros y precisos, pueden haberse visto afectados por un error en su reconstrucción. En cuanto a que el sujeto que huyo por el Pasaje Rinconada pudo haber salido por calle Vitacura y no por calle Rinconada, este tribunal lo considera poco probable. Por una parte, esa salida tiene reja y suele estar cerrada, Por otro lado, la inmediatez que existió entre el aviso radial del funcionario Gallo con la descripción del sujeto y la visualización del GARRIDO INDA con ropas que coincidían con estas por parte de sus colegas, hacen muchísimo más plausible que exista una identidad entre el sujeto visualizado por Gallo y el acusado a que este último sea un tercero ajeno a los hechos. A mayor abundamiento, GARRIDO INDA no dio una explicación sobre qué se habría encontrado haciendo a las 7:00 de la mañana en ese pequeño pasaje sin salida, siendo su versión original que él estaba caminando por Padre Hurtado, desde Av. Las Condes hacia Vitacura, lo que se contrapone con su presencia en dicho lugar”.

**Octavo:** Que, seguidamente, a la luz de los fundamentos antes transcritos y de cara al principio de corroboración que se dice conculcado, resulta evidente que los juzgadores se hicieron cargo no solo de ponderar



las probanzas aportadas –como el legislador les exige– sino que, además, se ocuparon de descartar cualquier duda que pudiese existir en torno a las posibles disimilitudes existentes en las declaraciones prestadas en juicio. Así, cada tópico que ha sido discutido por la defensa en su arbitrio, tendiente a sostener la absolución de su parte ha sido despejado en la sentencia, dando la correspondiente fundamentación al respecto. De manera que se explicitó, reflexionó y, finalmente, se asentaron las razones por las cuales se arribó a la solución que allí se sostiene. Luego, de la lectura de aquellas consideraciones aparece que sus deducciones surgen a partir del análisis de diversos elementos de convicción, todos los que conducen en idéntica dirección, lo que importa identificar allí la corroboración que extraña la recurrente. Lo anterior, sin necesidad de que se trate de pruebas que, por sí mismas, cada una, pueda demostrar la condena, del modo que se explicó en el motivo segundo que antecede.

Consecuentemente, bien puede colegirse que, habiendo argumentado los juzgadores en torno al ingreso del acusado al domicilio de las víctimas, particularmente en cuanto a las vestimentas que tenía el sujeto que ingresó al mismo; así como también en relación con la huida de aquel; y en cuanto al lugar y las circunstancias en que los guardias municipales detuvieron al acusado –explicitando, además, los motivos por los cuales aducen la inexistencia de contradicciones en los dichos de los testigos que depusieron al respecto– lo cierto es que más que un postulado referido a una supuesta afectación al principio de corroboración, se advierte que a la defensa no le parece suficiente la forma en que se han confirmado tales supuestos fácticos. Ciertamente, su reproche se orienta más propiamente a la forma de escrutar la prueba para arribar a la conclusión de cómo ocurrieron los hechos, que a la contravención de los principios que informan la manera cómo se ponderan los elementos de convicción.

**Noveno:** Que, en esta misma línea argumentativa, no puede dejar de anotarse que las reflexiones dirigidas a dar valor a los testimonios que contravienen los postulados sostenidos en el contexto de la teoría del caso que plantea la defensa, no se traduce, por sí solo, en un quebrantamiento a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados –límites de la sana crítica, como sistema de valoración de la prueba aplicable en este tipo de materias– pues la decisión impugnada aporta los motivos y expresa con claridad cómo y por qué arribó



a una determinada conclusión. En rigor –como se adelantó– del tenor del recurso se desprende que lo que se intenta impugnar es la valoración que hizo el tribunal y a base de la cual fijó los hechos conforme a los cuales calificó la participación del encartado, especificando las razones que llevaron a desestimar las propuestas de la defensa, rechazando su petición de absolución. De esta forma, lo único que destaca del libelo son ciertas contradicciones que surgirían de un análisis individual de las probanzas; pero esas protestas sobre la apreciación, más propias de un recurso de apelación, carecen de la eficacia legal requerida para configurar una causal de nulidad intentada.

Adicionalmente, en el motivo duodécimo del fallo cuestionado, antes transcrito, aparece que los juzgadores se hacen cargo de cada una de las aprehensiones que la defensa del imputado reitera en esta sede y de los raciocinios allí consignados no se vislumbra ninguna transgresión a los principios que integran la lógica exigida al ejercicio jurisdiccional punitivo, motivo por el que el arbitrio de nulidad formalizado por la representante del acusado será desestimado, ya que no se incurrió en la causal de nulidad prevista en la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, levantada en forma principal en su presentación.

**Décimo:** Que, según se ha anticipado, el motivo de nulidad planteado en forma subsidiaria por la defensa es aquella prevista en la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, por haberse efectuado en la sentencia una errónea aplicación del derecho en lo que toca al artículo 456 del Código Penal, y haberse omitido con ello la consecuente rebaja de pena. Explica que los juzgadores han considerado que no es aplicable al caso concreto la circunstancia atenuante descrita en tal disposición, yerro que entiende es sustancial dado que ante tal conclusión el acusado no pudo beneficiarse con la rebaja en un grado de la pena a la que fue condenado.

Asevera, en resumen, que al contrario de lo concluido por los sentenciadores en el caso concreto el acusado hizo devolución voluntaria de la especie robada al dejarla en los techos por el cual huía, cumpliéndose los requisitos de voluntariedad en su decisión y de inmediatez en la entrega, desde que esta devolución ocurrió antes de la detención del imputado, mientras era seguido por los guardias municipales. Afirma que se cumple el requisito de voluntariedad desde que la devolución es querida por su representado, quien intencionalmente dejó la especie sustraída en el techo



de la casa aledaña al domicilio de la víctima. Postula que, asimismo, se verifica la exigencia de oportunidad en la entrega, debido a que la devolución se realizó antes de la persecución penal del imputado, incluso antes de la llegada de personal de Carabineros y antes de decretar su prisión. Luego de citar doctrina y jurisprudencia relacionada con el artículo 456 citado concluye que el imputado al dejar la especie en el techo y continuar su huida tuvo la intención de devolverla a la esfera de resguardo de la víctima.

Finalmente afirma que, de haberse aplicado la norma mencionada, la pena asignada al delito habría sido la de presidio menor en su grado máximo, en atención a la rebaja en un grado que ordena la norma, afectando así la determinación de la sanción que debió imponerse al delito declarado y sancionado.

Consecuencialmente, pide acoger el recurso, invalidar la sentencia y dictar sin nueva audiencia, pero separadamente, una de reemplazo que dé aplicación a la atenuante especial mencionada, proponiendo una pena corporal de cuatro años y un día de presidio menor en su grado máximo por la autoría en el delito por el cual está acusado o la pena que este tribunal estime pertinente.

**Undécimo:** Que, para resolver cabe tener presente, en primer lugar, que el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal invocado dispone que procederá la declaración de nulidad del juicio oral y de la sentencia, cuando en el pronunciamiento del fallo se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del mismo. Al respecto se ha señalado que este motivo de invalidación dice relación con el contenido de la sentencia impugnada y, en particular, con las consideraciones de derecho tenidas en vista por los jueces del fondo para calificar un hecho como delito, como también respecto de las circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal del acusado, ya sea al fijar la naturaleza y el grado de la pena. En resumen, el reproche debe estar referido a una errónea aplicación de la ley sustantiva penal en relación tanto a la calificación jurídica de los hechos como de la participación culpable, o que determinen finalmente una condena o absolución de alguien con motivo de una persecución penal y sobre la base de una acusación que especifique las situaciones de imputabilidad respecto de un sujeto. En este entendido,



resulta indispensable puntualizar que, frente a la causal invocada, los hechos asentados no resultan modificables en este estadio procesal.

**Duodécimo:** Que en relación con el vicio de invalidación antes mencionado la Corte Suprema ha puntualizado “[...] según las directrices fijadas por la doctrina y la jurisprudencia, la presente causal de invalidación del juicio oral y de la sentencia concurre únicamente en los siguientes casos: a) cuando existe una contravención formal del texto de la ley, es decir cuando el juzgador vulnera de manera palmaria y evidente el texto legal; b) cuando se vulnera el verdadero sentido y alcance de una norma jurídica que sirvió de base y fundamento para la dictación de una sentencia; y c) cuando existe una falsa aplicación de la ley, situación que se verifica cuando el juzgador deja de aplicar una norma jurídica, cuando resulta realmente pertinente su aplicación. En este sentido, los autores Horvitz y López expresan que: ‘Conforme a la discusión legislativa de la norma pertinente en el Senado, el objetivo al que apunta sería el respeto de la correcta aplicación de la ley (elemento que informa el recurso de casación clásico, orientado a que el legislador tenga certeza de que los jueces se van a atener a su mandato), pero ampliado en general a la correcta aplicación del derecho, para incorporar también otras fuentes formales integrantes del ordenamiento jurídico’”. (CS N° 2095–2011).

Sobre este punto también se ha anotado que “[e]l error en la aplicación del Derecho a que se refiere el precepto, de acuerdo con la doctrina, puede provenir: ora de la infracción formal de la ley, ora de su falsa aplicación, ora de su errónea interpretación” (Juan Cristóbal Núñez Vásquez, “Tratado del Proceso Penal y del Juicio Oral”, Ed. Jurídica de Chile, año 2009, pág. 340.

**Décimo tercero:** Que, seguidamente, enfrentados los raciocinios que preceden a los argumentos esgrimidos por la impugnante, necesariamente debe concluirse que en el presente caso no se ha incurrido en el fallo censurado en la causal de anulación invocada, puesto que no se ha configurado alguna de aquellas hipótesis que, tanto la doctrina como la jurisprudencia citada, indican como constitutiva de la misma. Ciertamente, en la situación *sub judice* no se verifica la existencia de una contravención formal del texto de la ley, es decir, que el juzgador haya vulnerado de manera palmaria y evidente el contenido de la norma legal, máxime cuando en el arbitrio de nulidad no se divisa fundamento específico dirigido a demostrar de manera ostensible una vulneración a lo señalado en la ley



aplicable. Norma que, en este caso resulta ser el artículo 456 del Código Punitivo, el cual en lo pertinente estatuye lo que sigue: “[s]i antes de perseguir al responsable o antes de decretar su prisión devolviera voluntariamente la cosa robada o hurtada, no hallándose comprendido en los casos de los arts. 433 y 434, se le aplicará la pena inmediatamente inferior en grado a la señalada para el delito [...]”.

Diversa es la situación consistente en que la defensa disienta de los hechos fijados, el razonamiento y las conclusiones de los sentenciadores, quienes en el motivo duodécimo, en lo que interesa expresaron que “[e]n cuanto a su solicitud subsidiaria, esto es, la aplicación del artículo 456 del Código Penal, si bien el tribunal coincide en que dicha disposición no exige entre sus requisitos un especial ánimo o arrepentimiento por parte del sujeto, sí creemos que existe una diferencia entre la devolución voluntaria de la cosa robada y el simple deshacerse de la misma. En este caso no es posible acreditar una devolución voluntaria ya que no hay ningún antecedente sobre la misma, no habiendo siquiera el acusado declarado sobre este punto cuando decidió renunciar a su derecho a guardar silencio. Complementariamente, el lugar de difícil acceso en donde fueron abandonadas las especies, dificulta aún más la construcción de una “devolución voluntaria” y pareciera asemejar más a un deshacerse para evitar ser atrapado”.

**Décimo cuarto:** Que, así y conforme lo expuesto, tampoco concurre la segunda de las hipótesis descritas para estimar configurado el vicio de invalidación –cuando se vulnera el verdadero sentido y alcance de una norma jurídica que sirvió de base y fundamento para la dictación de una sentencia– debido a que, al decidir en la forma que lo han hecho los jueces del fondo, le han dado a la disposición antes aludida su sentido real y en la extensión que el legislador previó.

Al efecto debe consignarse que el precepto en análisis tiene como supuesto esencial la devolución voluntaria de la especie hurtada, sea antes de la persecución del encartado o antes de decretar su prisión, elemento que fue precisamente debatido en el caso *sub lite*. Ciertamente, en el caso de que se trata se ha postulado por la defensa que el hecho que las especies sustraídas hubieran sido dejadas por el acusado en el techo de una casa aledaña a la de las víctimas, en momentos en que este huía; y que ello se hubiera realizado antes de la detención del imputado, mientras era seguido



por los guardias municipales, esto es, previo a la persecución penal del encartado e incluso antes de la llegada de personal de Carabineros, configuraría los requisitos de voluntariedad en su decisión y de inmediatez en la entrega, propios de la figura penal que se pide aplicar.

Luego, no se discute entonces que el acusado dejó las especies sustraídas en los techos de una casa vecina a la de la víctima en momentos en que huía del lugar, con lo cual el escenario procesal se sitúa antes de la persecución penal y previo a decretarse su eventual prisión. Resta, consecuentemente, analizar si hubo una devolución voluntaria de las especies como aduce la defensa. En este punto, cobra relevancia anotar que la Real Academia de la Lengua Española define el adjetivo “voluntario/ia” en su primera acepción como: “[d]icho de un acto: Que nace de la voluntad, y no por fuerza o necesidades extrañas a aquella”.

**Décimo quinto:** Que, al realizar el examen mencionado se constata que, en el caso de autos, el condenado manifiestamente tuvo como intención la de apropiarse de las especies, para lo cual las sustrajo desde el domicilio de las víctimas, abandonándolas en los techos aledaños de la casa de aquellas en momentos en que huía del lugar y era seguido por funcionarios municipales. No puede considerarse, por tanto, que hubo en la especie una voluntad tendiente a revertir su ánimo de apropiación de la especie. Por el contrario, de los presupuestos fácticos asentados puede inferirse que el acusado analizó la situación en que se encontraba y fue el escenario que se representó, esto es, la posibilidad de ser detenido con las especies en poder, aunado a la necesidad de facilitar su escape, lo que lo motivó a dejar abandonas las especies en el sitio antes mencionado.

La norma que favorece al imputado con la aplicación de una pena más benigna, exige de este un *animus* personal que emana de su conciencia de no desear ya apropiarse de la cosa, sin intervención de factores externos que lo conmine a efectuar esta devolución. Pero más aún, en el caso que se observa, no solo no se divisa dicho ánimo exigible para que se entienda concurrente la atenuante en comento, sino que, adicionalmente, de modo alguno puede considerarse como una entrega o devolución de los bienes sustraídos a los afectados, como lo sostiene la defensa. En efecto, el abandono de aquellos durante el recorrido utilizado por el imputado para alejarse del lugar de los hechos, solo importa una renuncia por parte del autor del ilícito, una vez consumado aquel, a trasladar las especies hasta un



lugar que le permitiera su aprovechamiento y disposición. Así, desechar las especies para evitar la detención no puede identificarse con las ideas de entrega ni de voluntariedad en dicho acto, descritas en el artículo 456 del Código Penal, máxime cuando dicha actuación se verificó en un lugar de suyo difícil de acceder. Una acción de “entregar” –que consiste en dar a alguien algo–que, además, se requiere sea “voluntaria”, no puede concretarse del modo como aquí se sucedieron los hechos, vale decir, en los techos de una casa y durante la huida de quien las sustrajo.

**Décimo sexto:** Que, finalmente, tampoco se está ante la hipótesis consistente en haber efectuado la sentencia impugnada una falsa aplicación de la ley –situación que se verifica cuando el juzgador deja de aplicar una norma jurídica, cuando resulta realmente pertinente su aplicación– cuyo caso podría considerarse correspondiente al basamento del recurso de nulidad deducido en esta causa. Sin embargo, lo principal es que los razonamientos vertidos en los acápites que anteceden fuerzan a concluir la inviabilidad de que sea este tribunal de nulidad el que se superponga al del grado en la tarea de escrutar los hechos que vienen fijados en el fallo objetado y determine, a diferencia de lo definido por este último, que la circunstancia atenuante prevista en el artículo 456 del Código Penal, tantas veces citado, sí resulta concurrente, en los casos en que fue rechazada su aplicación y que, además, procede su calificación en la situación en que se consideró improcedente.

Estas razones revelan que el yerro ínsito en la causal invocada no está presente en el fallo cuestionado.

**Décimo séptimo:** Que bajo las condiciones que han sido expuestas, es fuerza concluir que el recurso de nulidad interpuesto por la defensa no puede prosperar, en ninguno de sus extremos.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 376 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad interpuesto por la defensora penal pública Marcela Araya Acuña en los autos RIT O-159-2023, RUC 2300339393-3, del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, en contra de la sentencia de once de septiembre del año en curso.

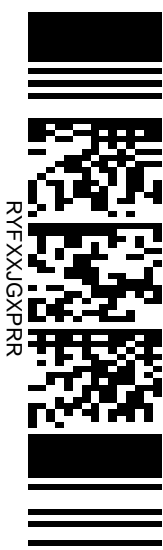
**Regístrese y comuníquese.**

Redactado por la Ministra Srta. Romy Grace Rutherford Parentti.

Rol Nro. 4963-2023 (Reforma Procesal Penal).







RYFXXJGXP RR

Pronunciado por la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Miguel Eduardo Vazquez P., Romy Grace Rutherford P. y Abogado Integrante Michael Christian Camus D. Santiago, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

